

## REPÚBLICA DE COLOMBIA

### TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



#### SALA LABORAL

Medellín, nueve (09) de noviembre de dos mil veintitrés (2022).

#### AUTO

Para representar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se le reconoce personería a la sociedad MUÑOZ Y ESCRUCERIA S.A.S. representada legalmente por la Dra. Eliana Moreno Pedroza, identificada con cédula de ciudadanía 43.921.415 y tarjeta profesional 173.191 del Consejo Superior de la Judicatura, y por sustitución de ésta se le reconoce personería al Dr. Juan Felipe Ochoa Sánchez, identificado con cédula de ciudadanía C.C. N° 1.040.732.989 y tarjeta profesional 264.143 del Consejo Superior de la Judicatura.

#### SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, Francisco Arango Torres y John Jairo Acosta Pérez, procede dentro del proceso ordinario con radicado número 05001-31-05-010-2016-01076-01, promovido por el señor JAVIER ANTONIO ECHEVERRI JARAMILLO contra COLPENSIONES, a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante frente a la sentencia absolutoria del

14 de septiembre de 2018, proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **23 de 2022**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

### ANTECEDENTES

Mediante acción judicial, el demandante pretende que se condene a Colpensiones al reconocimiento y pago de su pensión de vejez, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 758 de 1990, junto con el retroactivo pensional generado desde el cumplimiento de requisitos, mesadas adicionales, intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y costas.

Para fundamentar sus pretensiones expuso que nació el 17 de marzo de 1955 y cumplió 60 años en el 2015, cotizó al ISS desde el 18 de junio de 1973. A la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con más de 15 años de servicio. Tiene acreditadas más de 1.973 semanas en toda su vida laboral, pero la pensión de vejez le fue negada al no acreditar los requisitos de la Ley 797 de 2003 al perder el régimen de transición en virtud del Acto Legislativo 01 de 2005, el cual es inconstitucional porque el régimen de transición configura un derecho adquirido.

Admitida la demanda y notificada Colpensiones, dio respuesta oponiéndose a las pretensiones, por cuanto el demandante no es beneficiario del régimen de transición. Propone como excepciones inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir, buena fe, prescripción, cobro de lo no debido.

En **sentencia del 14 de septiembre de 2018**, el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, declaró probada la excepción inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir, y absolvió a Colpensiones de las pretensiones. Condenó en costas al demandante, fijando agencias en la suma de \$100.000.

### **RECURSO DE APELACIÓN**

La apoderada del demandante no comparte la decisión de primera instancia porque **i)** el Acto Legislativo 01 de 2005 desconoce la aplicación directa de normas internacionales que están llamadas a gobernar en este juicio, entre ellas, la Convención Americana de Derechos Humanos aprobada por la Ley 16 de 1972, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado por la Ley 74 de 1968, el Principio de Limburgo y el Protocolo de San Salvador de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado por la Ley 319 de 1996, las cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad y se encuentran en el mismo rango normativo de la Constitución Política. **ii)** La Constitución Política dispone aplicar los principios internacionales que en materia de derechos humanos son el principio de favorabilidad y de in dubio *pro operario*. **iii)** El régimen de transición que consagra el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en criterio de la jurisprudencia constituye un derecho adquirido y no una mera expectativa.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

Fueron presentados por Colpensiones, solicitando se confirme la sentencia en tanto el demandante no es beneficiario del régimen de transición, conforme al Acto Legislativo 01 de 2005.

### **PROBLEMA JURÍDICO**

Consiste en determinar si es posible la inaplicación por excepción de violación de de normas supranacionales del acto legislativo 01 de 2005, y por tanto el demandante es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y cumple los requisitos previstos en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, para acceder a la pensión de vejez de manera retroactiva, e intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

### **CONSIDERACIONES**

Frente al recurso promovido por la parte demandante, la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad los Arts. 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

Examinada en conjunto la prueba documental que reposa en el expediente, la Sala encuentra lo siguiente:

- El demandante le reclamó su pensión de vejez el 18 de marzo de 2015 y le fue negada en resolución GNR 124218 del 29 de abril de 2015<sup>1</sup>, por no cumplir los requisitos de la Ley 797 de 2003. Posteriormente, ante una nueva solicitud del 17 de marzo de 2017 y en el transcurso de este proceso, le fue reconocida dicha prestación a partir del 17 de marzo de 2017 conforme a la referida normatividad.
- Nació el 17 de marzo de 1955, tenía 39 años de edad y más de 15 años de servicio cotizados al 1º de abril de 1994, cuando entró en vigencia en el sector privado el Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993, lo que en principio lo hace beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 ibidem, que conservó la edad, el tiempo de servicios o el número de semanas de cotización y el monto de la pensión por vejez establecidos en el régimen anterior, a favor de tres categorías de trabajadores: los hombres con 40 o más

---

<sup>1</sup> Fl.21-22

años de edad, las mujeres con 35 o más años de edad, y unos y otras que independientemente de su edad tuviesen 15 o más años de servicios cotizados.

El régimen anterior al cual se hallaba afiliado el accionante, era el contenido en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por medio del Decreto 758 de la misma anualidad, que para acceder a la pensión por vejez exigía 60 o más años de edad a los hombres o 55 o más años de edad a las mujeres; y un número de 500 semanas de cotización pagadas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado 1.000 semanas de cotización sufragadas en cualquier tiempo.

Adicionalmente, el Parágrafo Transitorio 4° del Acto Legislativo 001 de 2005 expedido el 25 de julio del mismo año, instituyó el 31 de julio de 2010 como límite para la vigencia del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993, y demás normas que lo desarrollan, excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen tuviesen cotizadas, al menos, 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del Acto Legislativo, a los cuales se les mantuvo tal régimen hasta el año 2014.

- A la vigencia del referido Acto Legislativo el demandante tenía aportadas 1.656,97semanas, que le permitían conservar el régimen de transición hasta el 2014, y cotizó hasta el 11 de septiembre de 2011 y durante toda su vida laboral un total de 1.977,43 semanas.
- Al 31 de diciembre de 2014 tenía cumplidos 59 años de edad. Razón por la cual no consolidó el derecho a la pensión por vejez en los términos del Decreto 758 de 1990.

Para la apoderada del demandante, el acto Legislativo 01 de 2005 es una norma restrictiva y regresiva que desconoce derechos adquiridos.

A juicio de la Corte Constitucional, los regímenes de transición son mecanismos de protección que prevé el Legislador para evitar que los cambios introducidos por una reforma normativa afecten excesivamente a quienes tienen una expectativa

próxima de adquirir un derecho por estar cerca del cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder a él, en el momento del cambio legislativo; pero tales expectativas pueden ser modificadas por el Legislador en virtud de su competencia, si ello se requiere para cumplir fines constitucionales, y no de manera arbitraria en contraposición a la confianza legítima de los ciudadanos. Según la Corporación mencionada, toda modificación legal de carácter regresivo debe presumirse a primera vista como inconstitucional; sin embargo, hay que diferenciar, porque si lo que se modifica es un derecho adquirido, se aplica siempre el principio de no regresividad teniendo en cuenta el artículo 58 de nuestra Carta Política; y si lo que afecta el cambio es una expectativa legítima, el Juez tiene que analizar si el cambio de legislación fue desproporcionado, abrupto y arbitrario y no tuvo en cuenta los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto, en consonancia con los derechos de confianza legítima y protección especial del trabajo consagrados en los artículos 25 y 83 de la Constitución Política<sup>2</sup>.

Adicionalmente, en la reforma constitucional que se introdujo con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, en su trámite legislativo se expuso en sus motivaciones, que la finalidad de la modificación del artículo 48 de la Carta Política era procurar la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social asegurando la efectividad y la eficiencia de éste, razón por la cual debían tenerse en cuenta además de los principios de universalidad, progresividad, eficiencia y solidaridad; los de equidad y sostenibilidad financiera del sistema, “...por cuanto se dispone de recursos limitados que deben ser distribuidos de acuerdo con las necesidades de la población, para lo cual se deben establecer los mecanismos que logren la suficiencia con el fin de que realmente se dé la efectividad del derecho”.

Aparte de lo anterior, el límite a la aplicación del régimen de transición referido fue implementado por medio de una reforma constitucional, y según la Alta Corporación Judicial en cita, esa decisión se muestra en principio justificada y acorde con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, máxime que a su vez tuvo una aplicación no abrupta temporalmente hablando, pues en principio la

---

<sup>2</sup> Sentencia C-228 de 30 de marzo de 2011

aplicación del citado acto legislativo se consagró con posterioridad al 31 de julio de 2010, y para algunos afiliados lo fue a partir del 01 de enero de 2015.

No puede la Sala acoger el argumento central de la demanda y del recurso de apelación referente a la inaplicación del Acto Legislativo 01 de 2005, que contiene la reforma que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, porque de hacerlo conllevaría desacatar, desconocer o vulnerar la misma, norma superior de nuestro ordenamiento jurídico que entre los principios rectores de la seguridad social garantiza la sostenibilidad financiera del sistema pensional a cargo del Estado, teniendo en cuenta que en la materia, debe prevalecer el interés general sobre el particular, además se debe considerar que los derechos pensionales son derechos sociales, cuyo acceso debe garantizarse en lo posible a la mayor cantidad de habitantes del territorio colombiano posible, y tanto es así, que, desde este contexto se impusieron límites constitucionales a la vigencia del régimen de transición, en ejercicio de las competencias asignadas al constituyente constituido.

Se advierte además, que en torno a la constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2005, la Corte Constitucional por respeto al fuero del constituyente delegado, para emitir éstas reformas, ha reiterado que no le corresponde hacer juicios, y si esto interpreta la más alta Corporación de Justicia encargada de velar por la guarda de la Constitución, menos aún tendría esta Judicatura la facultad para realizar aquellos.

Sobre el particular, en sentencia C-242 de 2009, la Corporación mencionada indicó:

“...Las reformas a los regímenes pensionales, en particular, garantizan la sostenibilidad financiera del sistema pensional y la financiabilidad de otros potenciales pensionados. Estas finalidades constitucionalmente relevantes obligan a la ponderación entre sacrificios individuales y beneficios al sistema (artículo 48 CP, adicionado por el Acto Legislativo No. 1 de 2005). Ello explica que esta Corte haya puesto de presente que el Legislador no está obligado a sostener en el tiempo las expectativas que tienen las personas, conforme a las Leyes vigentes, en un momento determinado. Su potestad de configuración legislativa le habilita a modificar los regímenes jurídicos en función de nuevas variables, razones de oportunidad o conveniencia, y a otros intereses y circunstancias contingentes que deba priorizar para lograr los fines del Estado Social de Derecho, desde luego, consultando parámetros de justicia y equidad, y con sujeción a criterios de razonabilidad y proporcionalidad..”.

Desde ésta perspectiva, cabe precisar respecto de las personas que en una época fueron beneficiarios del régimen de transición, pero no alcanzaron a reunir todos los presupuestos de ley para obtener el status de pensionados durante el periodo en que, para ellos, estuvo vigente su régimen de transición, que tales no configuraron en ese lapso un derecho adquirido, sólo tenían una mera expectativa, susceptible de modificación, como fue la introducida por el Acto Legislativo 01 de 2005; y es que debe precisarse, que el cumplir con alguno de los requisitos consagrados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para acceder al régimen de transición, no implica el mantenimiento pétreo e indefinido de tales condiciones, como lo parece entender la apelante, sino que le garantizaba que, en un espacio temporal que se concretó con el Acto Legislativo 01 de 2005, se le respetaran y mantuvieran las condiciones pensionales del régimen anterior que tuviere, pero siempre con la carga de cumplir con las exigencias legales en un lapso determinado.

En igual sentido la Honorable Corte Suprema de Justicia en varias oportunidades ha tratado el tema que nos ocupa, como para traer solo un ejemplo la sentencia SL 2570 de 2019, donde expuso:

“...Por ello mismo, la Corte ha concluido que el Acto Legislativo 1 de 2005, que, como bien lo resaltó el Tribunal, hace parte del plexo normativo de la Constitución Política, introdujo límites temporales legítimos a la vigencia del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con respeto, eso sí, de los derechos adquiridos de los afiliados y teniendo en cuenta las expectativas de ciertas personas cercanas a la consolidación del derecho, al definir que no podría extenderse más allá del 31 de julio de 2010, a menos que el interesado tuviera 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo a la entrada en vigencia de la norma, caso en el cual se extendería hasta el 31 de diciembre de 2014...”. (CSJ SL841-2019).

Entre otras, en la sentencia CSJ SL4285-2018 se dijo al respecto:

“...En efecto, dicho Acto Legislativo, dispuso que la vigencia del régimen de transición previsto en el precepto 36 de la Ley 100/93, iría hasta el 31 de julio de 2010; pero de igual forma, previó la posibilidad de que quienes a la fecha en que entró a regir – 25 de julio de 2005-, tuviesen 750 semanas cotizadas o un tiempo de servicios equivalente, se les extendiera hasta el 31 de diciembre de 2014, cuyo objetivo era amparar aquellos afiliados que tenían expectativas próximas para alcanzar el derecho a la pensión de vejez.

Conforme a lo anterior, el hecho de poner un límite temporal al régimen de transición, que como su nombre lo indica, es transitorio, en manera alguna puede constituir una transgresión de derechos de los afiliados a alcanzar la



pensión por vejez, dado que no fue una modificación intempestiva, sino que por el contrario, dio la oportunidad a aquellos asegurados que tenía la expectativa legítima de pensionarse en el periodo que consagró, y de acuerdo a las reglas que allí fijó, de conservar los beneficios que las normas anteriores al referido Acto Legislativo les otorgaban para acceder a esa prestación...”.

Y en la sentencia SL 1223 de 10 de marzo de 2021, radicado 87265, en la cual el Alto Tribunal analizó si la pertenencia a un régimen de transición se constituye en un derecho adquirido, además de la incidencia del parágrafo 4° del Acto Legislativo 01 de 2005 en la transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, si la reforma constitucional es regresiva a la luz de las normas internacionales, precisó:

**“...1.- De los regímenes de transición y los derechos adquiridos**

Esta Corporación ha adocinado que los regímenes de transición son herramientas que evitan que los afiliados a un sistema pensional sufran las consecuencias de una decisión arbitraria producto de la libertad de configuración legislativa. Por tal motivo, las modificaciones al sistema jurídico que establece los criterios para acceder a beneficios pensionales no pueden, por regla general, introducir abruptamente nuevas condiciones sin la consideración de los afiliados próximos a adquirir el *status* de pensionado. Lo anterior se refuerza, si se tiene en cuenta que la seguridad social está catalogada como derecho fundamental según lo consagra el artículo 48 de la Constitución Política y, por su parte, el artículo 2.° del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales, que impide regresiones en los estándares de protección, sin la mediación de criterios de razonabilidad y proporcionalidad (CSJ SL16786-2017).

Ahora, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 estableció que quienes a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones -1.° de abril de 1994- tuvieran 35 o más años de edad en el caso de las mujeres y 40 o más años de edad en el de los hombres o 15 o más años de servicios cotizados, podrán alcanzar la pensión de vejez o de jubilación con los requisitos de edad, tiempo de servicios o número de semanas aportadas, y monto del régimen al que se encontraban adscritos antes de esa fecha; dichas personas podían acceder a tales prerrogativas con el cumplimiento de una o de ambas condiciones.

De esta forma, la citada norma previó una transición ante la vigencia del sistema general de seguridad social, puesto que protegió a un grupo de afiliados que, por su edad o densidad de cotizaciones, tenían la posibilidad cercana de causar una pensión bajo las reglas de regímenes anteriores.

No obstante, el cumplimiento de los requisitos para beneficiarse de esa transición normativa, de ninguna manera puede considerarse como un derecho adquirido. Sobre ese concepto, esta Corporación sentó que *«se entiende que hay un derecho adquirido cuando una persona ha satisfecho la totalidad de los requisitos que establece la ley, es decir, es aquél (sic) que ha entrado en el patrimonio de aquella»* (CSJ SL4650-2017).

Quiere decir lo anterior, que únicamente la consolidación del derecho pensional por el cumplimiento de los requisitos de edad y semanas cotizadas o tiempos de servicio, según la norma que lo regule, causa su inmutabilidad frente a las normas que se produzcan posteriormente. Al contrario, si el afiliado tiene un derecho en formación porque aún no cumple con las exigencias de la ley para causarlo, solo goza de una *expectativa*, concepto que, como se explicó, no corresponde al de derecho adquirido.

En ese orden de ideas, no le asiste razón a la recurrente cuando afirma que el hecho de cumplir con los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, le otorga al afiliado un derecho adquirido, dado que esa situación corresponde a una probabilidad cierta pero eventual de consolidar un derecho bajo las condiciones que establezca determinada ley, y siempre que no se produzcan cambios en el sistema.

## **2.- Del párrafo transitorio 4.º del Acto Legislativo 01 de 2005, su incidencia en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y derechos adquiridos**

El Acto Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, limitó la vigencia del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hasta el 31 de julio de 2010, pero, en aras de salvaguardar las expectativas de las personas próximas a causar una pensión por virtud de esa transición, extendió tal término hasta el 31 de diciembre de 2014, siempre que al 29 de julio de 2005, contaran al menos con 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios. Puntalmente la norma consagra:

Parágrafo transitorio 4º. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014.

De lo anterior deriva, que quienes no causaran el derecho pensional antes de 31 de julio de 2010 se acogerían al nuevo sistema general de pensiones, a menos que cumplieran las condiciones exigidas para la prórroga de la transición.

Por consiguiente, es acertado el análisis normativo que hizo el *ad quem*, en virtud del cual consideró que si bien la accionante contaba con más de 750 semanas a 29 de julio de 2005, lo cierto es que cumplió 55 años de edad el 10 de marzo de 2015, es decir, con posterioridad al 31 de diciembre de 2014, fecha límite que impuso el párrafo 4.º del artículo 1.º del Acto Legislativo 01 de 2005 para beneficiarse del régimen de transición.

Ahora bien, la tesis que propone la recurrente en aras de inaplicar esta última disposición, carece de prosperidad porque se trata de una norma de rango suprallegal; tampoco sería viable aducir, eventualmente, la excepción de inconstitucionalidad por emanar directamente de la Carta Política y, además, porque esa reforma no tuvo efectos retroactivos sobre situaciones consolidadas conforme a leyes anteriores; antes bien, previó su salvaguarda y señaló el término máximo para la aplicación de regímenes anteriores.

Dicho de otro modo, aunque el Acto Legislativo 01 de 2005 limitó la vigencia del régimen de transición, ello no implica que sus efectos sean retroactivos y mucho menos que haya fulminado derechos adquiridos hasta ese entonces; por el contrario, dicha norma constitucional respetó las situaciones consolidadas, pues dejó a salvo los derechos de quienes estructuraron un *status* pensional al amparo de los regímenes anteriores.

### **3.- El párrafo 4.º del Acto Legislativo 01 de 2005, ¿es regresivo a la luz del bloque de constitucionalidad?**

Como la censura aduce que el Acto Legislativo 01 de 2005 también es inaplicable por ser regresivo respecto a los principios contenidos en los preceptos internacionales que acusa, es necesario destacar que dicha disposición, que reformó el artículo 48 de la Constitución Política, se produjo en el marco de las facultades que el artículo 375 *ibidem* confiere al legislador.

Por tanto, se trata de una norma reformativa de la Carta Política que adquiere el consecuente *status* de norma supralegal, cuyo control de constitucionalidad a la luz del artículo 241 compete únicamente a la Corte Constitucional. Además, ese control se limita a vicios en el procedimiento, materiales o de fondo que solo se pueden evaluar en la medida que la disposición sustituya al texto de la Constitución.

Ahora, es claro para esta Colegiatura que tampoco es aplicable el principio de favorabilidad contemplado en el artículo 53 Superior, por cuanto el mismo parte de la existencia de duda en la aplicación o interpretación de normas en vigor, mientras que, en el presente caso, existe disposición especial que determina la vigencia del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. De manera que, al existir ese precepto que regula la situación de forma unívoca, es el único aplicable.

En ese contexto, no es posible inaplicar la norma que se acusa. Primero, porque esta Sala carece de competencia para resolver conflictos de constitucionalidad de una norma supralegal y, segundo, porque la corporación judicial competente para ello definió que el Acto Legislativo 01 de 2005 no sustituyó el texto de la Constitución Política...”.

Posición reiterada en sentencia SL3242-2022 Radicación n.º 92467 del 23 de noviembre de 2022, entre otras.

Resulta pues evidente, que el Acto Legislativo 01 de 2005, más que resultar contrario a la Carta Política y, puntualmente, afectar derechos adquiridos, lo que propende es por la protección de estos y, guardar, de manera razonable en el tiempo, aquellos derechos en curso de adquisición, conforme a las pautas que el constituyente derivado allí fijó, más no mantener, de manera indefinida los mismos.

En consecuencia, se **confirmará** íntegramente la sentencia.

Costas en estancia instancia a cargo de la parte demandante y en favor de Colpensiones, al resultar vencido con la formulación de su recurso de apelación. Se fija como agencias en derecho la suma \$1.160.000 en favor de Colpensiones, conforme al Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, vigente al momento de presentación de la demanda<sup>3</sup>.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la decisión que se revisa en virtud del recurso de apelación presentado por la parte demandante, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

**SEGUNDO:** Costas en estancia instancia a cargo de la parte demandante y en favor de Colpensiones. Se fija como agencias en derecho la suma \$1.160.000 en favor de la demandada, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**TERCERO:** Lo resuelto se notifica por **EDICTO**.

Se ordena regresar el expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

---

<sup>3</sup> Demanda presentada el 12 de septiembre de 2016

**Firmado Por:**

**Jaime Alberto Aristizabal Gomez**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**John Jairo Acosta Perez**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**Francisco Arango Torres**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **67b1d233b6b5ae64c77e63206910109a1efd9244b17185b3504b32d2d929d7d3**

Documento generado en 09/02/2023 02:14:42 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**